

EL CÓNCLAVE Y LA RENUNCIA A LA RENUNCIA

- La Presidenta, en un obcecado diagnóstico, ratificó el compromiso irrestricto con un programa de gobierno que sólo ha generado consecuencias negativas para el país.
- El Ejecutivo se resiste a responder a las evidentes señales de desgaste en la conducción del Gobierno, reflejadas en niveles de desaprobación presidencial que llegan a un 70%, la cifra más alta de toda la serie de períodos presidenciales registrados, a lo que se agrega que por primera vez en el actual mandato, quienes se identifican con la oposición sobrepasan a quienes se identifican con el Gobierno.
- La tesis de que el rechazo a las reformas se explica por la pretensión de que la ciudadanía no sólo quiere reformas, sino que adicionalmente las quiere profundizar, no se condice con las cifras de los estudios de opinión post cónclave, donde luego de ratificarse el proceso de reformas, el rechazo a éstas se incrementó, al igual que la desaprobación presidencial.

PRINCIPIO LYD:

Gobierno responsable.

Contrario a la opinión que plantean algunos observadores y analistas, el Cónclave de la Nueva Mayoría sí vino a despejar algunas interrogantes que se habían instalado en el horizonte político. Por de pronto, lo primero que se despejó, es que la Presidenta, en un obcecado diagnóstico, ratificó el compromiso irrestricto con un programa de gobierno que sólo ha generado consecuencias negativas para el país, produciendo niveles de rechazo que alcanzan un punto máximo en las trayectorias de aprobación presidencial, y un fenómeno de incertidumbre y escepticismo ciudadano respecto del presente y del futuro, del cual tampoco se tenía antecedentes.

Con esta señal, la Presidenta ha desestimado un giro al centro, que más que una reorientación en términos de coordenadas políticas, suponía la incorporación de una dosis mínima de realismo en su acción gubernamental y un retorno al diseño responsable y técnicamente orientado de política pública, minimizando sus efectos adversos. Así las cosas, hemos pasado de la desafortunada y contradictoria máxima del "realismo sin renuncia", a una renuncia a la posibilidad de dejar atrás un modo de conducción política donde, finalmente, ha sido el voluntarismo el que se impuso al realismo.

UN GOBIERNO QUE NO RESPONDE A LAS SEÑALES

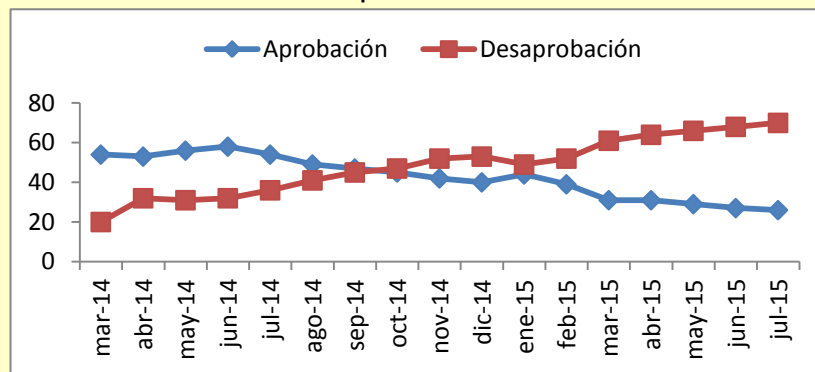
Tres hechos sustantivos son posibles de observar a partir de las encuestas de opinión que hemos conocido durante las últimas semanas. En primer lugar, resultan



evidentes las señales de desgaste en la conducción del Gobierno reflejadas en los niveles de aprobación presidencial. Conforme a datos de Adimark, los niveles de desaprobación desde marzo de 2014 a julio de 2015 han experimentado un aumento de 50 puntos porcentuales (Gráfico N° 1), llegando a un 70% de desaprobación, la cifra más alta registrada en toda la serie de mandatos presidenciales. En segundo lugar, por primera vez en este periodo presidencial, el porcentaje de personas que se identifica con la oposición, supera a aquellas que se identifican con el Gobierno, mostrando un alza de 9 puntos porcentuales respecto de la medición anterior (Gráfico N° 2), situación que se suma a un consistente cuestionamiento y escepticismo respecto de las reformas que el Gobierno se trazó como ejes angulares para la consecución de su programa de Gobierno (Gráfico N° 3).

DESAPROBACIÓN PRESIDENCIAL ALCANZA MÁXIMO HISTÓRICO

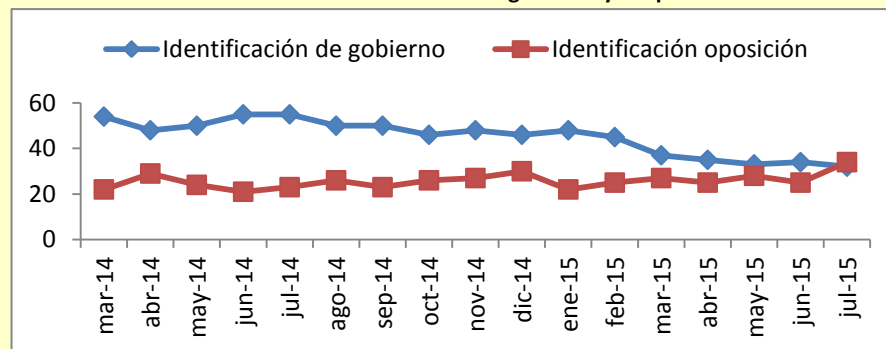
Gráfico N° 1. Serie Aprobación Presidencial Adimark



Fuente: Elaboración propia a partir de datos Adimark.

IDENTIFICACIÓN CON OPOSICIÓN SUBE 9 PUNTOS Y SUPERA A LA DEL GOBIERNO

Gráfico N° 2. Identificación con el gobierno y la oposición



Fuente: Elaboración propia a partir de datos Adimark.

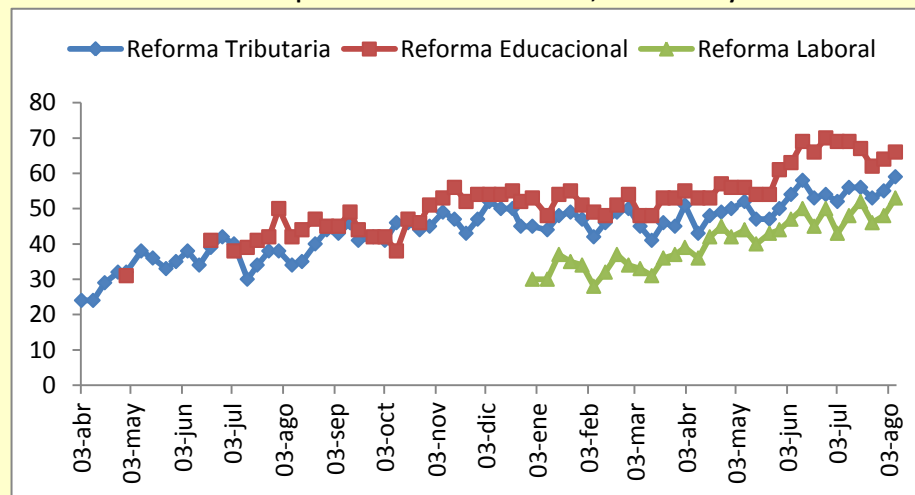


A lo anterior se agrega que un 64% de los encuestados considera que el país transita por un mal camino, un 62% percibe que la economía está estancada, y en la misma proporción, se sostiene que la Presidenta no tiene un plan para solucionar los principales problemas del país, conforme a datos de CADEM.

Sin embargo, a pesar de las evidentes señales de desgaste político, diversas voces de personeros y analistas vinculados al mundo de la Nueva Mayoría se rebelan al hecho de que la ciudadanía no adhiera a sus planteamientos de reformas, señalando como hipótesis alternativa, que el cuestionamiento de la ciudadanía a la conducción del Gobierno, se funda en la pretensión maximalista de que la gente rechaza las reformas porque ellos anhelarían "más reformas". Tesis infundada, en la medida que las mismas tendencias reflejadas en la opinión pública post cónclave revelan que existió un castigo al Gobierno por el hecho de persistir en su senda reformista.

AUMENTA DESAPROBACIÓN DE LAS REFORMAS TRAZADAS EN EL PROGRAMA

Gráfico N° 3. Desaprobación Reforma Tributaria, Educacional y Laboral



Fuente: Elaboración propia a partir de datos Plaza Pública CADEM.

Y es que insistimos en que si aquella hipótesis fuera cierta, la respuesta de la ciudadanía con posterioridad al Cónclave del oficialismo habría sido diametralmente distinta, una vez que lo único que se ratificó en aquella instancia, fue que precisamente las reformas no están sujetas a morigeración o gradualismo alguno. Si la ciudadanía quiere reformas, e inclusive quiere más reformas, entonces ¿cómo se explica que post Cónclave, un 60% de los encuestados considere que el Gobierno va en la dirección equivocada, conforme los datos de la encuesta Plaza Pública CADEM, y tanto la aprobación presidencial, como el rechazo a las reformas se hayan visto incrementados? Al parecer, el problema de la ciudadanía con las reformas no pasa

por su comunicación, ni por su gestión, sino más bien por su contenido y también por sus resultados, que ya se hacen notar, particularmente en el terreno económico¹.

LA MODERACIÓN APARENTE

Las expectativas que se instalaron en la escena política con posterioridad al cambio de Gabinete donde hicieron ingreso al comité político Jorge Burgos, al Ministerio del Interior y Rodrigo Valdés al Ministerio de Hacienda, posibilitaron que de cara al llamado "segundo tiempo" de Gobierno adquiriera fuerza la tesis de la moderación - particularmente en un contexto de restricción económica- no sólo en el tono, sino que también en aspectos cruciales en términos de la definición de expectativas que produce el Gobierno: hablamos de las resoluciones políticas en materia de Reforma Laboral, Constitucional y Educacional, entre otras.

Sin embargo, al momento de hacer un análisis respecto de los espacios de poder efectivo en los cuales estos temas son discutidos y zanjados políticamente, la hegemonía siempre se ha inclinado hacia el lado de los "sin renuncia" y no de los "realistas". Al respecto, y reforma por reforma, en primer lugar, en materia de Reforma Constitucional mientras la señal de la Presidenta fue rechazar la idea de convocar a un plebiscito para iniciar el proceso constituyente, los presidentes de las comisiones de Constitución de la Cámara de Diputados y del Senado -ambos del mismo partido de la Presidenta (PS)-, presentaron al Gobierno, inmediatamente, una contrapropuesta de plebiscito para establecer el mecanismo de la reforma.

Luego, y en lo que concierne a la Reforma Laboral, algunos de los tímidos esfuerzos del ministro Valdés por establecer fórmulas para morigerar el fin del reemplazo en la huelga y otras disposiciones que podrían deprimir las ya dificultosas condiciones económicas, colisionan con el ímpetu reformista de los presidentes de las comisiones de Trabajo, tanto de la Cámara como del Senado y la posición de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), quienes han señalado que lo anterior constituiría una renuncia injustificable a la reforma.

En materia educacional, persistiendo el Gobierno en el errado enfoque de gratuidad para la educación superior, post cónclave se introdujeron modificaciones a su propuesta inicial, reduciendo el porcentaje de cobertura de la gratuidad para el 50% de los estudiantes más vulnerables, incorporando, de paso, a universidades privadas. Sin embargo, los criterios para la asignación de ésta nuevamente son abiertamente discriminatorios y fundados en fuertes premisas ideológicas –como las del requisito de poseer alguna fórmula de cogobierno universitario- que no se orientan a los principios de focalizar los recursos en los alumnos más vulnerables ni tampoco el de considerar a aquellas instituciones de educación superior de mejor calidad.

Entonces, el haber instalado un tono de moderación parece ser más bien una táctica comunicacional en el contexto de una estrategia política apuntada a bajar la intensidad de los cuestionamientos de la ciudadanía y los actores políticos relevantes, pero sin renunciar al trazo fundamental que orienta el proyecto maximalista y refundacional de la Nueva Mayoría.

CONCLUSIONES

Tras la expectación política generada en torno a las definiciones políticas adoptadas por el Gobierno post cónclave, la lectura sólo puede ser una: éste persiste en resistir las señales ciudadanas y desconocer las restricciones económicas, al ratificar que la implementación del programa es “sin renuncia”.

Ni la desaprobación de un 70%, el persistente rechazo a sus reformas, ni la negativa prospectiva ciudadana marcada también por la incertidumbre económica, generada precisamente, en buena medida, por el efecto de las reformas, así como tampoco el ingreso de la dupla ministerial de Jorge Burgos y Rodrigo Valdés han logrado que el ímpetu reformista del Gobierno se vea aminorado.

Probablemente el análisis de que la ciudadanía cuestiona las reformas porque anhela cambios aún más profundos sea predominante en el núcleo de toma de decisiones del Gobierno, es cuestionado por los sondeos post cónclave al evidenciar un aumento tanto en la desaprobación de la conducción presidencial, como de las reformas, con posterioridad a que éstas fueran ratificadas por la Presidenta.

ⁱ Al respecto, el Informe Anual del FMI sobre Chile atribuye la desaceleración económica tanto al menor precio del cobre como a la incertidumbre sobre las reformas estructurales del Gobierno.